

negando el amparo que ha pretendido, sin imponer multa al quejoso por su insolencia; con apoyo de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal y de la ley de 20 de Enero de 1869 que cita el juez referido se resuelve lo siguiente.

Por sus propios legales fundamentos, es de confirmarse y se confirma la sentencia que pronunció el mismo juez en Zacatecas á 25 de Enero de este año, declarando: que la justicia de la Union no ampara ni protege á Juan José Alonso contra la órden del general Neri, por la que lo consignó al Gobierno del Estado y este á la gefatura política de la capital sin hacérsele saber su delito, el nombre de su acusador y no haberse decretado su formal prision; porque estando acusado el quejoso de saltador y suspensas para estos las garantías que designa la ley de 18 de Mayo de 1871, no se han violado las que protegen los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución general de la república mexicana.

Devuélvase las actuaciones al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero diez de mil ochocientos setenta y dos.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el juzgado de Distrito del Estado de Yucatan, por la señora D<sup>a</sup> Fidelia Quijano contra el H. ayuntamiento de Mérida, que con infraccion de los artículos 16 y 27 de la Constitución federal, ha ocupado y mandado destechar los portales de expendio de maíz, propiedad de la quejosa.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

En el juicio de amparo promovido por la representacion de D<sup>a</sup> Fidelia Quijano, el fiscal alega para definitiva, diciendo: que el H. ayuntamiento de esta ciudad, no ha justificado haber procedido constitucionalmente, al ordenar la demolicion de los techos del portal que sirve de motivo al recurso, porque la quejosa supone que ha sido ejecutada con violacion de las garantías protegidas por los artículos 16 y 27 del código fundamental de la República. Si la señora Quijano no hubiese acumulado por medio de su representante, los datos necesarios para demostrar la violencia y anti-constitucionalidad de los hechos reclamados, la demostrarían las constancias que la autoridad responsable ha producido en el juicio, á causa de su misma contradiccion y de la incoherencia que encierran: incoherencia y contradiccion, que revelan la poca fé que el mismo cuerpo municipal tiene en la justicia de esa obra de destruccion, y que bastaria por sí sola, para acreditar la procedencia del recurso, á no existir razones mas positivas y pruebas mas eficaces de que la querellante ha hecho un buen acopio, en favor de su solicitud. Y efectivamente, el informe dado por el H. ayuntamiento acerca de la suspension del acto reclamado, se contrae á que ésta no debe decretarse por haberse concluido la demolicion de los techos de los portales que fué necesario disponer, en virtud de que la señora Quijano no aceptó las proposiciones

que lo hizo el cuerpo mismo, para la reedificación que exigía su estado de ruina. Por lo visto, en este documento se reconoce á la actora como dueña de aquel edificio, pues de otro modo no se comprende la razón de que se le hubiese considerado obligada á la reposición ó reparación de los techos de aquella vasta galería, solo por la circunstancia de estar edificada frente á la extensión línea de casas cuya propiedad no se le disputa. Pero mas adelante, en su informe sobre el punto esencial del recurso, el consejo municipal pone en duda, ó mejor dicho, alega que los portales son del municipio, porque han sido edificados en suelo del comun, ó con rentas de la nación, y que la señora D<sup>a</sup> Fidelia Quijano, sin haber probado ser propietaria del edificio en cuestión, está obligada, sin embargo á conservarlo por el contrato de servidumbre á que se halla afecto. La ilustración de vd., C. juez, excusa al ministerio fiscal, de hacer la refutación de esas frases que se implican en sus propios términos y se destruyen mutuamente, porque las servidumbres rústicas ó urbanas, por las reglas generales del derecho, no pueden constituirse sino en las cosas ajenas, y sería un absurdo, en consecuencia, declarar responsable de la conservación de la cosa que sirve, á la persona que no es dueño de ella. El II. ayuntamiento, sin embargo, en medio de esta serie de claudicaciones é irregularidades en el orden de la defensa de sus actos, ha presentado como justificante de ellos el acuerdo certificado que obra á fojas 19, y por fundamento el art. 68 de la ordenanza de 4, no de Setiembre, sino de Diciembre de 1786, y el 19 de las municipales de esta ciudad, sancionadas el 14 de Mayo de 1861. Pero ese acuerdo es *contra-productum*, porque prueba que en un asunto tan grave y delicado, no obró el H. cuerpo municipal con la mejor circunspección y detenimiento, al tomar aquella medida de destrucción, como se dice en su informe de fojas 9, pues el expresado acuerdo fué toma-

do con tanta festinación, que ni siquiera le precedieron los trámites de reglamento que se requirieron aun para las determinaciones de menor entidad, ni le siguieron los que previene la citada ordenanza 68, que á la letra dice en lo conducente: "y que si algun edificio ó casas particulares amenazaren ruina, *obliguen á sus dueños á repararlas en el término correspondiente que les señalaren.*" Por ventura, ¿se concedió á la señora D<sup>a</sup> Fidelia Quijano, un término cualquiera para destruir los techos de sus portales, dado que estuviesen ruinosos? Además, la ley 10, tít. 32, part. 3<sup>a</sup>, previene que: "si los edificios antiguos fallecen ó quieren derribar por vejez, ó los vecinos que están cerca de ellos temen se de recibir onde daño. Sobre tal razón como esta decimos que el juez del lugar, puede ó debe mandar á los señores de aquellos edificios, que los enderecen ó que los derriben. E porque mejor se pueda esto hacer, debe el mismo tomar *buenos maestros é sabidores deste menester*, é yr al lugar do están aquellos edificios de que se temen los vecinos; é si él viere ó entendiere por aquello que le dijeren los maestros que están á tan mal parados que non se pueden adovar, é non lo quieren hacer aquellos cuyo son, é que ligeramente pueden caer é facen daño. Entónces deve mandarlos derribar." El II. ayuntamiento ¿cumplió acaso con tomar *buenos maestros* para el reconocimiento de los techos derrumbados? Consta, en efecto, que tomó al ingeniero D. Olegario G. Canton, que por muy bueno y competente que sea, es al fin *uno solo*, cuyo dicho está en oposición con el de mas de dos peritos en la misma materia, presentados por la quejosa, quienes contestes declaran, que el techo de que se trata, podia durar un largo espacio de tiempo mediante ciertos reparos, cuyo costo no llegaria á cuatrocientos pesos: y que con los "piés de amigo" que tenia; no habia riesgo de que cayesen. Por último, el bando publicado para la ciudad de México el 5 de Junio de 1824 por

el alcalde constitucional D. Francisco Fagoaga, aunque no es una disposicion que comprenda á esta de Mérida, puede citarse como una razon escrita, aplicable en el presente caso, que en su parte final, despues de prescribir la observancia de la referida ley de partida y ordenanza 68 de Intendentes, previene á los alcaldes y regidores que respecto de los edificios que se hallan arruinados ó amenazan ruina, se proceda económica y gubernativamente en todos los casos que no fueren contenciosos por su naturaleza, y reservando los que sean á la potestad judicial, para que administre justicia conforme á las leyes. Así, pues, ó el H. ayuntamiento de esta ciudad requirió á D<sup>a</sup> Fidelia Quijano para que echase abajo el techo que se suponía ruinoso, señalándole al efecto un plazo y no cumplió, y entonces se hizo contencioso el caso por su naturaleza, debiendo pasarse desde luego el conocimiento de él á la autoridad judicial, ó no la requirió en lo absoluto, y entonces la falta no es solo cometida contra la prescripcion del mencionado bando, sino contra la de dicha ley de partida y el art. 68 de la repetida ordenanza, que el síndico de aquella H. corporacion, de comunes, dice que es la base de sus atribuciones. La omision de estas fórmulas tutelares, constituye evidentemente la infraccion de los artículos 16 y 27 del código fundamental de la República, que ha servido de razon al recurso que debe concederse; porque ¡ay de la propiedad que estuviere expuesta á los efectos de esos acuerdos poco cuerds, á causa de su misma festinacion, si la poderosa mano de la justicia nacional no estuviese pronta á protegerla contra ellos! En el presente caso, con el pretexto, ó quizá con el motivo, pero no justificado si lo hubo, de evitar un peligro inminente, se ha producido un mal efectivo; con razon ó sin razon de destruir una ruina *en cuestion*, se ha hecho una ruina en realidad. Y el H. ayuntamiento que conforme al art. 1º de sus ordenanzas, en que dice haberse funda-

do, debiera procurar el ornato y seguridad del municipio, ha tenido la triste gloria de añadir un apéndice á las ruinas de la Ciudadela que quedan frente por frente de los portales de D<sup>a</sup> Fidelia Quijano, y de atropellar la propiedad de esta señora en vez de darle las prendas de seguridad á que tiene derecho como habitante del municipio. En mérito de lo expuesto y con fundamento de los artículos 16 y 27 del pacto federal y de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, el fiscal concluye pidiendo para definitiva se sirva vd. declarar que la justicia de la Union ampara y protege á D<sup>a</sup> Fidelia Quijano contra el acto de la destruccion de los techos correspondientes á los portales de su propiedad, prevenida por el H. ayuntamiento de esta ciudad; y contra la que intenta ejecutar, segun la quejosa, de la arquercía de ese mismo edificio ubicado hácia el extremo occidental de la Alameda y antigua fortaleza de san Benito de esta capital.

Mérida, Enero cuatro de mil ochocientos setenta y dos.—*P. Híjuelos.*

#### *Sentencia del O. juez de Distrito.*

Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan.

Mérida, Enero quince de mil ochocientos setenta y dos.

Visto este juicio de amparo promovido por la Sra. D<sup>a</sup> Fidelia Quijano contra el ayuntamiento de esta capital que con infraccion de los artículos 16 y 27 de la Constitucion de los Estados Unidos Mexicanos, dice haber ocupado y mandado destechar los portales de expendio de maíz, los cuales alega ser de su propiedad. Visto el decreto de suspension del acto reclamado; el informe del cuerpo municipal sobre lo principal; el parecer fiscal pidiendo se abra á prueba el juicio; el auto en que se abrió y las pruebas rendidas; lo alegado por las partes; la citacion para sentencia y las constancias

mandadas compulsar para mejor proveer, con cuanto mas ver y tener presente convino.

Considerando:

Primero; que en cuanto á la justificación de propiedad de la parte actora; sin contar con las declaraciones de testigos, se funda en la cláusula 5ª del testamento de D. Joaquin de Quijano, quien al hablar en ella de las casas contiguas á los portales, no les dá estos por linderos, como lo hubiera hecho á no haber sido tambien suyos, sino la Alameda y la Ciudadela de San Benito: en la aprobacion de la adjudicacion de las casas y portales en Dª Fidelia Quijano por autoridad competente, adjudicacion basada en el justiprecio de la posesion, tomada en cuenta la situacion, extension y el terreno con inclusion de los treinta y cinco arcos de los portales de que se trata: en la inspeccion ocular que se practicó y declaracion en ella del perito D. Miguel Pifarré nombrado por las partes, de que resulta que las casas contiguas á los portales y éstos, fueron contruidos á un tiempo, habiéndoseles cubierto con un solo techo del mismo material, cosa que se nota por el declive gradual de su desagüe y por la carencia de caballete que es lo que sirve para marcar la division de los edificios; y si no se ha disputado la propiedad de las casas á la Sra. Quijano, tampoco se le puede disputar la de los portales que tienen idéntica procedencia.

Segundo; que esta propiedad la ha reconocido el ayuntamiento con haberle hecho proposiciones á dicha Sra. para la reedificacion de los portales; con haberla amenazado diciéndole que seria responsable por la conservacion de ellos; con haberla demandado en conciliacion para que los techara ó destruyera; con quererla obligar á que pague los gastos de demolicion de los techos y con alegar que en ellos tiene derecho de servidumbre el comun.

que se concluyó la destruccion el dia que se promovió el presente juicio: que se dice sigue el ayuntamiento ocupando los rollizos y demas materiales de los techos y que aun existe pendiente ante dicha Corporacion una proposicion para vender el terreno de los portales, lo cual patentiza la ocupacion actual, y que no se ha ocurrido al remedio de amparo despues de consumada la ocupacion.

Cuarto; que por lo tocante á la destruccion de techos, se hizo sin audiencia de la propietaria, sin señalarle término para componerlos ó destruirlos, procediéndose con tal precipitacion que ni siquiera se dieron los trámites ordinarios á la proposicion presentada al ayuntamiento sobre el particular, y se autorizó á la comision de policía al efecto, la que llevó á cabo la destruccion, fundada en la opinion de un solo ingeniero que aseguró amenazaban ruina, opinion dada no mas que por lo que vió, sin haber tocado los techos con instrumento alguno, segun aconsejan las reglas del arte, dando esto lugar á que se presentara prueba en contrario, como se ha presentado plena de varios testigos y peritos.

Quinto; que el ayuntamiento para legalizar sus actos, se apoya en el art. 1º de sus ordenanzas de 14 de Mayo de 1861 que le señala como sus atribuciones: "entender en todo lo relativo á la policía de salubridad, de comodidad y ornato, orden y seguridad de su municipio etc., y en el art. 68 de la ordenanza de Intendentes, que dice: "si algun edificio ó casas particulares amenazaren ruina, obligen á sus dueños á repararlas en el término correspondiente que les señalaren, y de no hacerlo lo mandarán ejecutar á costa de los mismos dueños."

Sesto; que la sola exposicion de estas disposiciones demuestra, que se ha faltado á ellas; pero se evidencia mas la falta añadiendo lo que dispone la ley 10, tít. 32

cion de los | part. 3.ª *El otro si los edificios antiguos*  
os consta: | *fallecen ó quiérense derribar por vejez, é*

Tercero; en cuanto á la ocupacion de los portales para destruir los techos

*los vecinos que están cerca de ellas temen se de recibir ende daño. Sobre tal razon como esta decimos que el judgador del lugar, puede é debe mandar á los señores de aquellos edificios, que los enderezen ó que los derriben. El porque mejor se pueda esto facer, debe el mismo tomar buenos maestros, é sabidores de este menester, é yr al lugar do están aquellos edificios de que se temen los vecinos; é si el viere ó entendiere por aquello que le dijeren los maestros que están á tan mal parados que non se pueden adobar, é non lo quieren facer aquellos suyos son, é que ligeramente pueden caer é facer daño.»*

Setimo; que con esta ley está de acuerdo el bando publicado en la ciudad de México en 5 de Junio de 1824, dando facultad al ayuntamiento para proceder respecto de edificios arruinados, ó que amenazan ruina, procediéndose, dice: *económica y gubernativamente en todos los casos que por su naturaleza no fueren contenciosos y reservando los que los sean á la potestad judicial, para que administre justicia conforme á las leyes; sabiéndose por el sentido legal de la palabra contencioso, segun el diccionario de Legislacion de Escriche, que es aquello en que la oposicion de parte abre la discusion la contienda: de suerte que si el ayuntamiento de esta ciudad, hubiera cumplido con aquella prescripcion, acaso hubiera dado lugar á un juicio, que no podria ser administrativo, porque ni la Constitucion ni las leyes secundarias admiten juicio administrativo sino en causas de contrabando.*

Octavo; que de lo dicho se infiere que no habiéndose oido á la propietaria para la destruccion de los techos de los portales, á lo cual se hubiera opuesto, conforme á sus hechos anteriores y posteriores, se procedió violentamente ántes de que llegara á saberse si el caso era del resorte judicial y por consiguiente, sin la competencia requerida por el artículo 16 de la Constitucion federal para molestar á una persona

en sus posesiones, violándose además el art. 27 con la ocupacion de la propiedad de la Sra. Quijano, sin los requisitos que prescribe, por lo cual se le debe amparar á pesar de la ley de 2 de Diciembre último, sobre suspension de garantías; posterior al inicio de este juicio. Por lo expuesto, la autoridad nacional, de conformidad con el parecer fiscal y arreglado á la ley de 20 de Enero de 1869,

Falla:

Primero: la Justicia de la Union ampara y protege á la Sra. D<sup>a</sup> Fidelia Quijano contra actos del ayuntamiento de esta capital que, con infraccion de los artículos 16 y 27 de la Constitucion general, ha ocupado y mandado destechar los portales de expendio de maíz que son de su propiedad.

Segundo; sáquese testimonio de esto fallo para publicar y olévonse los autos á la Corte Suprema de Justicia de la Nacion para su revision, conforme á los artículos 13 y 27 de la citada ley de 20 de Enero.

Notifíquese.—*J. Manzanilla.*—Ante mí, José Anacleto Castillo.

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Febrero tres de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el juicio de amparo que en dos de Noviembre del año próximo anterior promovió en la ciudad de Mérida, el C. Antonio Lara por la señora su madre D<sup>a</sup> Fidelia Quijano de Lara, alegando: que el H. ayuntamiento de esa ciudad por medio de su comision de policía, ha mandado derumbar los techos de la posesion de portales de la señora expresada, situados al poniente de la Ciudadela de San Benito, habiéndose iniciado el derrumbamiento, sin la voluntad de la propietaria y sin los requisitos legales; temiendo el promovente que la medida se extienda á la arquería y quejándose de

que con ella, el ayuntamiento ha violado en su representado los artículos 16 y 27 de la Constitución federal. Vistos los informes del ayuntamiento responsable, exponiendo como principal razón de la providencia que reclama la señora Quijano de Lara, que los techos amenazaban ruina y eran causa de inminente daño, no habiéndose pensado en destruir los arcos. Vistos los pedimentos del promotor fiscal; las pruebas rendidas; el alegato de la señora; la exposición que ha remitido á esta Suprema Corte de Justicia el ayuntamiento de Mérida; la sentencia del juez de Distrito que ha conocido de este juicio, con todo lo demás que de autos consta y ver convino.

Considerando: primero; que conforme á lo dispuesto por el art. 68 de las ordenanzas de 4 de Diciembre de 1786 y por la ley 12 tit. 32 part. 3ª para que el ayuntamiento citado haya podido mandar que se derrumbasen los techos de los portales que expresa la señora Quijano, como ruinosos y para evitar daño al público, ha sido necesario verificar el estado amenazante en que se encontraran, por calificación de peritos competentes; y que previamente al derrumbe de los techos se hubiera intimado á la señora que en término dado los repusiera ó destruyera y ella hubiese opuesto indiferencia ó resistencia indebida.

Segundo; que de autos no consta legalmente probado que se hayan llenado esos requisitos, y portanto que el derrumbe ordenado por el ayuntamiento haya sido en derecho procedente.

Tercero; que en mérito de lo expuesto, no existe el motivo y causa legal del procedimiento reclamado y con él se vulneran los derechos de propiedad que alega tener la quejosa en los repetidos portales que posee, violándose en su persona las garantías que otorgan los artículos 16 y 27 de la Constitución de la República, con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, orgánica de los artículos 101 y 102 de la misma Constitución, se resuelve lo siguiente: Es

de confirmarse y se confirma en los términos siguientes la sentencia del juez de Distrito de Yucatan, pronunciada en Mérida á 15 de Enero último: "La justicia de la Union ampara y protege á la señora Dª Fidelia Quijano, contra los actos del ayuntamiento de esa Capital que con infraccion de los artículos 16 y 27 de la Constitución general, ha ocupado y mandado destechar los portales de expendio de maíz que como propiedad suya alega estar poseyendo la señora Quijano.

Devuélvase sus actuaciones al juzgado de Distrito que las elevó, acompañándole testimonio autorizado de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Anza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Leon Guzman.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Febrero diez y seis de mil ochocientos setenta y dos.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.